

Id Cendoj: 35016340012003100013
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)
Sección: 1
Nº de Recurso: 857/2001
Nº de Resolución: 1240/2003
Procedimiento: Recurso de suplicación
Ponente: EDUARDO JESUS RAMOS REAL
Tipo de Resolución: Sentencia

Secretaria: D^a. M^a EUGENIA CALAMITA DOMÍNGUEZ

Ilmos. Sres:

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

D^a MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de Septiembre de 2003.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen. EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de suplicación interpuesto por D. Jose Daniel contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 2001, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 6 de los de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de juicio 1.071/1998 sobre prestaciones. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D. Jose Daniel contra el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 26 de febrero de 2001 por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 6 de los de Las Palmas de Gran Canaria.

SEGUNDO.- En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes: PRIMERO.- D. Jose Daniel , nacido el 8/8/38, afiliado a la Seguridad Social con el número NUM000 , padece las siguientes lesiones y enfermedades derivadas de enfermedad común: Obesidad, temblor esencial de predominio en manos y cefálico, artrosis primaria, y síndrome de **fibromialgia** secundaria con dolores generalizados y sensación de fatiga, limitado para actividades de sobrecarga articular y trabajos que requieran precisión y pulso manual; siendo su profesión habitual técnico de imagen y sonido (electricista). Inició proceso de incapacidad laboral transitoria el 8/1/92, causando alta con propuesta de invalidez el 28/4/98. SEGUNDO.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó Resolución de fecha 18/6/98, vista la propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades de 25/5/98 efectuada previo análisis del informe médico de síntesis, por la que acordó otorgar a la parte actora prestación por Invalidez Permanente Total para su profesión habitual. Al actor se le reconoce el derecho a la prestación de invalidez permanente en el grado de IPT cualificada, siendo el importe de la pensión de 52.980 pesetas mensuales, con efectos económicos desde 9/8/98. TERCERO.- La base reguladora es de 70.639 pesetas mensuales (folio 36 de las actuaciones). CUARTO.- El actor no ha percibido prestaciones de invalidez provisional, encontrándose durante el periodo de 29/10/91 al 8/8/98 en la situación de subsidiado como trabajador mayor de 52 años, con percepción de las prestaciones correspondientes. QUINTO.- Interpuesta reclamación previa resultó desestimada.

TERCERO.- La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo: Que desestimo la demanda

interpuesta por el actor D. Jose Daniel contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y en su virtud le absuelvo de los pedimentos deducidos en su contra.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión del actor, D. Jose Daniel , por la que solicitaba ser declarado afecto de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio derivada de enfermedad común, confirmando la resolución del INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL de fecha 18 de junio de 1998 que lo declaraba en situación de invalidez permanente, en grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Técnico de Imagen y Sonido (Electricista). Frente a la misma se alza el actor mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, sea estimada la pretensión contenida en la demanda que da origen al presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por el cauce del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral solicita el recurrente la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de adicionar al ordinal primero, expresivo de las patologías y limitaciones funcionales padecidas por el actor, dos nuevos párrafos redactados con el siguiente tenor literal: "En el año 92 inicia una situación de IT por un cuadro de polialtralgias que permanece con predominio de muñecas, rodillas y hombros", "Según el dictamen del EVI aprobado por la resolución recurrida el actor se encuentra limitado para actividades..." Basa su pretensión revisoria en el documento obrante a los folios 22 a 24 y 35 de las actuaciones, consistente en copia del informe médico de síntesis.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y sentencia del Tribunal Supremo 17 de noviembre de 1990: "...sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador..."); c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Sobre tales premisas la Sala llega a la conclusión de que el presente motivo de revisión fáctica ha de fracasar, en cuanto a la primera de las modificaciones postuladas, porque del documento invocado por el recurrente, esto es, el informe médico de síntesis, no se desprende de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de argumentaciones, suposiciones o conjeturas más o menos lógicas el dato fáctico que se pretende introducir en la resultancia de hechos probados (que el actor padece polialtralgias), pues tal cuadro no ha sido objetivado médicamente sino que ha sido incorporado al informe como "manifestaciones del interesado". En cuanto a la segunda de las adiciones postuladas, por cuanto que la misma es absolutamente intrascendente para resolver la cuestión que nos ocupa y en nada afectaría al sentido de la presente resolución.

Quedan, consiguientemente, los hechos probados firmes e inalterados.

TERCERO.- Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia el recurrente la infracción del artículo 137 párrafo 1º letra c) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, definidor del grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita en su escrito de interposición. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que las lesiones descritas en el relato fáctico de la sentencia combatida, una vez recogidas la modificaciones fácticas postuladas, limitan la capacidad física del trabajador para el ejercicio de todo oficio o profesión, por liviano, sedentario o sencillo que éste fuere.

El grado de incapacidad permanente absoluta está configurado en el T.R. de la Ley General de la Seguridad Social como el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio (artículo 137 párrafo 5º, 137 párrafo 1º letra c. actual). La jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 9 de febrero de 1987 que ha recopilado la doctrina en tal sentido) establece que: "este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumir, con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumir a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen", (en el mismo sentido, sentencias de 24 de febrero y 16 de julio de 1987).

La jurisprudencia viene entendiendo que la declaración de invalidez permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral (sentencia 10 de noviembre de 1982), atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales (sentencia 25 de enero de 1983), o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional (sentencias de 22 de enero de 1985, 24 de enero, 12 de junio y 22 de noviembre de 1989, 22 de enero, 2 de abril, 30 de junio, 20 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 1990). La determinación de tal grado de invalidez ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a apreciar conjunta o simultáneamente, de un lado, la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación. De tal manera que el artículo 135 párrafo 5º de la Ley General de la Seguridad Social no debe ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más de su tenor literal, en evitación de que resulte imposible su aplicación real, y sí, por el contrario, sin perder nunca de vista la objetividad que el sentido propio de sus palabras comporta, en relación con el contexto y sus antecedentes históricos, debe actuarse dicha norma de tal suerte que su aplicación atienda fundamentalmente a alcanzar el espíritu y la finalidad que determinaron su promulgación (sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio, 5 y 6 de octubre de 1981, 10 de abril, 2 de junio, 26 y 29 de noviembre, 3 de diciembre de 1984, 22 de abril, 10 y 19 de junio de 1985 y 16 y 27 de febrero, 13 de junio de 1989, 22 de enero, 7 de marzo y 11 de diciembre de 1990).

Del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia se desprende que el actor está afecto del siguiente cuadro médico: obesidad, temblor esencial de predominio en manos y cefálico, artrosis primaria y síndrome de **fibromialgia** secundaria con dolores generalizados y sensación de fatiga (hecho probado primero). Tales padecimientos le producen las siguientes limitaciones funcionales: para actividades que impliquen sobrecarga articular y trabajos que requieran precisión y pulso manual (hecho probado primero). A la vista de lo expuesto, hemos de estar de acuerdo con la declaración de incapacidad efectuada por el Ente Gestor, pues si bien el actor se encuentra incapacitado para el ejercicio de su profesión habitual de Técnico de Imagen y Sonido (Electricista), la cual requiere una considerable precisión y pulso manual, en cambio si posee suficiente aptitud física residual para afrontar con rendimiento, eficacia y profesionalidad las tareas esenciales de aquellos otros trabajos livianos, sedentarios y sencillos que no impliquen la realización de los esfuerzos físicos para los que se encuentra impedido, sin que para ello le sea exigible un espíritu de superación o sacrificio desmedido o se ponga en peligro su integridad física, sin perjuicio de que, sobrevenida una evolución desfavorable del cuadro de padecimientos, sea otra la conclusión a adoptar en su momento oportuno y previa acreditación del empeoramiento.

Lo expuesto conduce a la Sala, al haberlo entendido así la Magistrada de instancia, a la desestimación del motivo, por su efecto del recurso y a la confirmación de la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Jose Daniel contra la sentencia dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 6 de los de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 26 de febrero de 2001, la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito BANESTO, cuenta número 3537/0000660857/01 a nombre de ésta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital coste de una pensión de la Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 euros en la entidad de crédito BANESTO, cuenta corriente 24100000660857/01, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, procediéndose al archivo del Rollo sin más trámite.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el /la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.